

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada Ponente

APELACIÓN AUTO	
DEMANDANTE	JUAN ALBERTO LAVERDE VÁSQUEZ
DEMANDADO	FAMEL SAS
RADICADO	05088-31-05-001-2018-00967-01
TEMA	Excepción Previa – Prescripción
DECISIÓN	Confirma

Medellín, veintidós (22) de julio de dos mil veintidós (2022)

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede a proferir decisión de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **JUAN ALBERTO LAVERDE VÁSQUEZ** contra la empresa **FAMEL S.A.S.**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 032**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I.- ANTECEDENTES

Mediante proceso ordinario laboral de doble instancia, el señor JUAN ALBERTO LAVERDE VÁSQUEZ solicita lo siguiente:

Que se declare que entre la empresa y el demandante existió un contrato de trabajo a término fijo por seis meses entre el 15 de diciembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018, el cual finalizó de manera unilateral e injusta por parte del empleador. Que, a consecuencia de dicha declaración, se condene a la demandada a reconocerle reajuste salarial y de las prestaciones sociales por toda la vigencia de la relación laboral, de conformidad al salario realmente devengado; la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por el no pago de las prestaciones sociales y la del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por no haber consignado las cesantías a un fondo administrador; la indemnización por despido injusto y la indexación de las condenas, así como las costas procesales del juicio.

Admitida la demanda mediante auto del 28 de enero de 2019, notificado por estados del 29 de enero de 2019 al demandante, la empresa FAMEL SAS dio respuesta a la demanda a través de apoderado judicial idóneo (página 100 y siguientes del PDF 1 del expediente digital), a través de la cual formuló la excepción previa de PRESCRIPCIÓN, la cual sustentó en los siguientes términos:

“En este caso la parte actora reclama indemnización por despido injusto, pago de prestaciones sociales y sanciones moratorias. Y es claro que el actor fue despedido el 31 de julio de 2018. También es claro que la demanda fue presentada el 19 de diciembre de 2018 y que su Despacho admitió la demanda en auto del 28 de enero de 2019. Sin embargo, la notificación personal de dicho auto solo se dio hasta el 10 de septiembre de este año, teniendo en cuenta que a mi representada se le envió correo electrónico con el auto admisorio de la demanda el 08 de septiembre de 2021.

Así las cosas, la presentación de la demanda no interrumpió la prescripción en el presente caso según lo dispuesto en el artículo 94

del Código General del Proceso, aplicable al procedimiento laboral según el artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral...” (sic).

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA OBJETO DE ALZADA:

En la audiencia de conciliación obligatoria, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación del litigio, y decreto de pruebas, celebrada el 13 de mayo de 2022 el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello - Antioquia, DECLARÓ no probada la EXCEPCIÓN PREVIA de PRESCRIPCIÓN, propuesta por la sociedad FAMEL S.A.S

Como fundamento de su decisión, argumentó que, revisada la demanda y su contestación, se concluye que no se encuentra en discusión la existencia de la relación laboral y sus extremos entre el 15 de diciembre de 2014 y el 31 de julio de 2018, momento este último a partir del cual empezó a correr la prescripción extintiva de tres años, la cual se configuraría el 31 de julio de 2021, situación que permite advertir que la demanda, en principio, interrumpió la prescripción, al haberse presentado el 19 de diciembre de 2018.

En punto al análisis del artículo 94 del Código General del Proceso y la supuesta no interrupción de la prescripción en que la pasiva sustenta la configuración del fenómeno extintivo por no haberse notificado la demanda en el año siguiente a la notificación del auto admisorio de la demanda, indicó que la activa tenía hasta el 30 de enero de 2020 para llevar a cabo la notificación del auto admisorio de la demanda a la empresa demandada, conservando la posibilidad de que la interposición de la demanda interrumpiera el fenómeno extintivo.

Pese a que advirtió que la demanda fue notificada al demandado el 8 de septiembre de 2021, esto es, luego de transcurrir más de un año de la notificación del auto admisorio de la demanda al demandante, estimó que la demanda sí interrumpió la prescripción, teniendo en cuenta que la Sala Administrativa del

Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, esto es, por espacio de tres meses y 15 días, lo que habría permitido que la parte demandante tuviere hasta el 15 de octubre de 2021 para notificar la demanda a la empresa demandada, hecho que sucedió el 8 de septiembre de 2021, salvaguardándose así el efecto interruptor de la demanda con la presentación de la demanda.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

La referida decisión fue recurrida en apelación por el apoderado judicial de la sociedad FAMEL S.A.S, quien expresó su inconformismo con la decisión de primer grado argumentando que la decisión de primer grado es equivocada al tener en cuenta la suspensión de términos que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura decretó entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, como quiera que el año que tuvo el actor para notificar la demanda al demandado transcurrió entre el 29 de enero de 2019 (fecha de notificación al demandante del auto admisorio de la demanda) y el 29 de enero de 2020, sin que la situación concreta hubiere sido objeto de extensión por la suspensión de términos decretada por la mencionada entidad, como quiera que el 16 de marzo de 2020 cuando la misma empezó, ya se había vencido desde el 29 de enero de 2020 el año con que contaba la activa para notificar el auto admisorio de la demanda a la pasiva, bajo la posibilidad de que la presentación de la demanda hubiere interrumpido el término de prescripción, lo cual no ocurrió.

Alegatos de conclusión:

Ambas partes presentaron alegatos de conclusión en la oportunidad procesal correspondiente.

La parte demandante llamó la atención de este colegiado a través de dichos alegatos, expresando que – en este caso la parte demandante sí intentó la notificación a la parte demandada dentro del año siguiente a la admisión de la

demanda, según se puede evidenciar en las citaciones enviadas de forma física a la dirección de la demandada, con recepción positiva tanto de la citación para notificación personal, como la notificación por aviso; - Que, en marzo de 2020 se solicitó al juzgado de conocimiento el nombramiento de curador ad litem a la empresa demandada en virtud del artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, presentándose en ese mismo mes la pandemia Covid 19 que suspendió los términos procesales, siendo solo hasta septiembre de 2021 que el despacho digitalizó el expediente y procedió a realizar la notificación personal a la empresa demandada, sin tener en cuenta que la empresa ya había recibido la citación para notificación personal, siendo excesivo el garantismo que se le dio a la demandada, como quiera que estima que se le debió haber nombrado curador ad litem, y; - Considera que la parte demandada, pese a que recibió la notificación por aviso, de manera desleal no se hizo presente proceso, y ahora pretende derivar provecho de esa conducta.

Con fundamento en esos argumentos solicitó se confirme el auto interlocutorio de primer grado.

La parte demandada hizo lo propio y, a través de los alegatos formulados, solicitó se revoque el auto de primera instancia, con fundamento en los argumentos que se formularon en el recurso de apelación y en que, - Las pretensiones de la demanda y su indiscutible conclusión sobre su exigibilidad el 31 de julio de 2018 cuando el trabajador fue despedido, no permiten dudar acerca de que, conforme al artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, la acción para reclamar esos derechos prescribe en 3 años; - Que, al ser palmario que la notificación del auto admisorio de la demanda se dio el 29 de enero de 2019, la activa contaba con un año hasta el 29 de enero de 2020 para haber notificado a la empresa demandada, lo cual no ocurrió, en tanto la notificación se llevó a cabo en septiembre de 2021, no habiéndose interrumpido la prescripción con la presentación de la demanda y por ende, configurándose el fenómeno extintivo, al no existir duda acerca de la fecha de exigibilidad de los derechos reclamados; - Expuso las razones por las cuales estima que la parte demandante no debe beneficiarse de la interrupción de términos que el Consejo

Superior de la Judicatura decretó desde el 16 de marzo de 2020, haciendo énfasis en que esa suspensión empezó a correr cuando ya había transcurrido más de un año desde que se admitió la demanda.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La cuestión jurídica a resolver en esta instancia judicial, se circunscribe estrictamente a la apelación presentada a instancias de la parte demandada, en contra del auto interlocutorio dictado por el A *Quo*, el 13 de mayo de 2022, a través del cual declaró no probada la excepción previa de PRESCRIPCIÓN.

Dicha providencia, es apelable, conforme lo establece el numeral 3° del artículo 65 del CPT y SS., modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001.

Ahora bien, la controversia suscitada estriba en dilucidar, si en el sub lite se dan los presupuestos procesales para declarar probada como previa, la excepción de PRESCRIPCIÓN, al no haberse notificado la demanda dentro del año siguiente a su admisión.

LA PRESCRIPCIÓN

La posibilidad de que la excepción de PRESCRIPCIÓN pueda ser resuelta como previa se encuentra contenida en el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social del Trabajo y la Seguridad Social, cuando establece que *“el juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada”*.

Son los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, los que establecen el término de tres

años para que opere la prescripción extintiva en materia de derechos sociales. Al tenor de dichas disposiciones, estableció el Legislador:

“Artículo 488 CST. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto”.

y

“Artículo 151 CPT y SS. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.

Disposiciones que determinan la extinción del derecho desde su concepción sustancial y la acción desde la óptica procedimental, en el término de tres años. Tal justificación ha sido acogida por las altas corporaciones jurisprudenciales; verbi gracia, la Corte Constitucional en la sentencia C-072 de 1993, sentencia de constitucionalidad en la que se analizó la conformidad a la carta de las dos disposiciones normativas citadas, expresó que *“el núcleo esencial del derecho al trabajo no se desconoce, por el hecho de existir la prescripción de la acción laboral concreta. El núcleo esencial del derecho al trabajo no solo está incólume, sino protegido, ya que la prescripción de corto plazo, en estos eventos, busca mayor prontitud en el ejercicio de la acción, dada la supremacía del derecho fundamental, el cual comporta la exigencia de acción y protección oportunas”.*

La teleología que subyace a la existencia de la prescripción extintiva, se inspira en razones de orden público y paz social, como valores en los cuales la sociedad se encuentra interesada, a fin de que se consoliden las situaciones jurídicas sobre los derechos, y se genere la lógica consecuencia de la extinción cuando el titular de un derecho ha estado demasiado tiempo sin ejercitarlo.

Tal postura goza de una pacífica aceptación en la jurisdicción laboral, a partir de los reiterados pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que ha sostenido que *“en asuntos judiciales de carácter social, el término de prescripción es de 3 años, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 448 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”* (sentencia 27.365 del 19 de octubre de 2006).

El artículo 94 del Código General del Proceso, aplicable en este puntual tema por virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, establece que:

“ARTÍCULO 94. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA. *La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado.*

La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo se producirán a partir de la notificación.

La notificación del auto que declara abierto el proceso de sucesión a los asignatarios, también constituye requerimiento judicial para constituir en mora de declarar si aceptan o repudian la asignación que se les hubiere deferido.

Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificación a los que se refiere este artículo se surtirán para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario será indispensable la notificación a todos ellos para que se surtan dichos efectos.

El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una vez”.

CASO CONCRETO

En el presente caso, no existe duda en cuanto a que: *i)* se están reclamando derechos de reajuste e indemnizatorios que se hicieron exigibles el 31 de julio de 2018; *ii)* que la demanda fue radicada por el actor el día 19 de diciembre de 2018; *iii)* que el Presidente de la República, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional a causa de la pandemia Covid – 19; *iv)* Que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales a partir del 16 de marzo de 2020 (Acuerdos PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 y PCSJA20-11519 del 16 de marzo de 2020) y que; *v)* Dicha corporación prorrogó dicha suspensión y la levantó a partir del 1º de julio de 2020, mediante Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020.

La parte demandada argumentó que el actor fue despedido el **31 de julio de 2018**; la demanda fue presentada el **19 de diciembre de 2018**; el Despacho admitió la demanda en auto del **28 de enero de 2019**, y que la misma solo vino a ser notificada a FAMEL SAS hasta el **10 de septiembre de 2021**, teniendo en cuenta que el **08 de septiembre de 2021** se le envió correo electrónico con el auto admisorio de la demanda.

Las anteriores calendas son ciertas, y corresponden a cada uno de los momentos en los que respectivamente, fue despedido el actor (según lo confiesa en el escrito de demanda); se presentó el libelo introductor; se admitió la demanda y, se surtió la notificación bajo los presupuestos del artículo 8º del Decreto 806 de 2020.

De un análisis detallado de las piezas procesales, partiendo de la fecha de exigibilidad de los derechos que se reclaman, resulta innegable que, desde el punto de vista sustancial, en el presente caso no ha operado la prescripción extintiva.

Ello, por cuanto no resultan válidas las consideraciones que tiendan a enervar un derecho sustancial en procura de salvaguardar la aplicación de una norma procedimental, pasando por alto que la regla de extinción del derecho no se ha configurado. En efecto, tal y como lo establece el artículo 11 del Código General del Proceso, *“al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial”*, cuestión que impone en el presente caso tener en cuenta que, más allá de que el artículo 94 del Código General del Proceso establezca que *“la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante”*, cuando el derecho no ha desaparecido por la prescripción sustancial, la prescripción instrumental o procedimental no puede hacer fenecer el derecho.

Ahora, lo anterior no significa que se pretenda desconocer el efecto general inmediato que tienen las disposiciones adjetivas e incluso el carácter de orden público que inspira la prescripción, en tanto la fijación de las reglas de prescripción en materia jurisdiccional está ligada a la seguridad jurídica y guarda relación con el principio de certeza de las decisiones jurídicas.

En el presente caso, si bien la notificación de la demanda al demandado solo se llevó a cabo en septiembre de 2021, esto es, por fuera del año contado entre el 29 de enero de 2020 y el 29 de enero de 2021, que es el lapso en el que conforme al artículo 94 del Código General del proceso se debió haber llevado a cabo la notificación de la demanda a la empresa demandada, es pertinente tener en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho que se está reclamando, que lo fue el 31 de julio de 2018, momento en que el trabajador fue despedido, luego razón le asiste al juez de primera instancia cuando, de cara a la prescripción trienal del derecho sustancial contabilizó la suspensión de términos ordenada por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, a efectos de entender que dicha suspensión permitió extender el conteo por tres meses y medio adicionales,

para tener como límite máximo de prescripción trienal del derecho sustancia el 15 de noviembre de 2021, producto de que no hubieren corrido los términos judiciales entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, por virtud de los Acuerdos PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 y PCSJA20-11519 del 16 de marzo de 2020, que reactivaron los términos judiciales a partir del 1º de julio de 2020. Teniendo en cuenta que la notificación a la empresa demandada se realizó en septiembre de 2021, esto es, dentro de los tres años siguientes a la exigibilidad del derecho, es evidente que no se ha configurado la prescripción extintiva.

En consecuencia, se confirmará el auto de primera instancia.

Costas en esta instancia a cargo de la empresa FAMEL SAS y en favor del señor JUAN ALBERTO LAVERDE VÁSQUEZ, al no haber prosperado el recurso de apelación formulado, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente para la anualidad 2022.

V. DECISIÓN

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral,

RESUELVE:

Primero: CONFIRMAR íntegramente el auto interlocutorio objeto de apelación de fecha 13 de mayo de 2022, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bello, según lo expuesto en precedencia.

Segundo: CONDENAR en COSTAS en esta instancia a cargo de la empresa **FAMEL SAS** y en favor del señor **JUAN ALBERTO LAVERDE**

VÁSQUEZ. Agencias en derecho la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente para la anualidad 2022.

Se ordena notificar lo resuelto en **ESTADOS** virtuales y la devolución del expediente al juzgado de origen.

Los magistrados


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 128 del 25 de julio de 2022.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/130>